

administrativa a nivel doctrinario y jurisprudencial –Nacional y Española-, y C. Aplicación de la caducidad al presente caso.

A. Este Tribunal Sancionador, procurando que todo procedimiento administrativo se tramite según los plazos previamente establecidos en las DTPA, especialmente en lo referente a la caducidad administrativa, considera que al presente procedimiento sancionador debe aplicarse la obligación establecida en el artículo 5 inciso 2° que establece: “*El procedimiento administrativo deberá concluirse por acto o por resolución final en el plazo máximo de noventa días posteriores a su iniciación (...)*”. De acuerdo con dicha regla, este Tribunal Sancionador es del entendimiento, que existía un máximo de 90 días contados a partir del inicio del procedimiento administrativo sancionador para emitir resolución final. Por otro lado, las mismas DTPA en su artículo 8 establecen que: “*Los plazos que el presente decreto establece en días, se comprenderán solamente días hábiles*”, es decir, el plazo de los 90 días, debía computarse en días hábiles. Una vez concluidos estos 90 días hábiles las DTPA regularon los efectos legales del acaecimiento de la finalización de este plazo, estableciendo en su artículo 7 letra b) que vencido el plazo máximo para dictar resolución expresa en los procedimientos en que la Administración ejerce potestades sancionadoras, ***se producirá caducidad***.

B. La caducidad es una figura procesal que regula la terminación anormal o anticipada del procedimiento administrativo, que se refiere a un hecho jurídico-procesal específico: el transcurso de un plazo procesal señalado por ley. Por ejemplo, transcurrido el plazo previsto para el ejercicio de un derecho, o la realización de un trámite, o la interposición de un recurso, la doctrina procesal establece que se entenderá por perdido el derecho, trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse. La caducidad también dará lugar a la terminación de un proceso, extinguiéndolo por el hecho de que no ha habido actividad procesal alguna en el plazo que establece la ley. En otros términos: en virtud del interés general, dentro del ordenamiento jurídico la caducidad se crea para que las acciones y recursos sean ejercidos dentro de un plazo concreto, de manera que los procedimientos no queden estancados indefinidamente, y que los derechos o potestades otorgados en términos favorables sean realmente aprovechados por sus titulares.

En el ámbito del derecho público administrativo la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ha emitido sentencia mediante la cual define la caducidad administrativa como: “*(...) un modo anormal de finalizar un proceso administrativo que ha sido paralizado durante un tiempo considerado por la Ley, esta figura no extingue en ningún momento una obligación puesto que esta puede ser interpuesta nuevamente dentro de un nuevo procedimiento administrativo, siempre y cuando dicha obligación siga siendo exigible*”. (Sentencia de referencia 29-2006, con fecha veinticinco de enero de dos mil diez).

De acuerdo a la doctrina administrativa española¹, la caducidad puede ser de dos tipos: 1) subjetiva, cuando la caducidad se funda en la presunción de que es intención de la parte demandante abandonar el proceso; y 2) objetiva, cuando la caducidad se funda en la necesidad de evitar una duración excesiva de los procesos y los peligros que para la seguridad jurídica encierra. Por tanto, de acuerdo al derecho procesal común, si se dieran los supuestos determinados de caducidad, cualquiera de las partes puede pedirla. Sin embargo, dado el carácter público del proceso administrativo, no sería necesaria la petición de parte, por lo que el órgano podrá declararla de oficio.

Una vez definida doctrinaria y jurisprudencialmente la caducidad administrativa, este Tribunal Sancionador, considera prudente hacer referencia, a continuación, del marco normativo vigente al momento de que se dieron los supuestos fácticos de la caducidad en el presente caso.

C. En armonía a lo antes expuesto, este Tribunal considera que en el caso en particular, se cumplen con los supuestos de las DTPA que regulan la caducidad, y que la misma es aplicable al presente caso, ya que la resolución que dio inicio al procedimiento administrativo sancionador seguido contra la proveedora [redacted] S.A de C.V., fue emitida el día 13/11/2018 y notificado a la proveedora el 25/01/2019 y al realizar el cómputo de la caducidad al caso en concreto, se advierte que el plazo de los 90 días hábiles inició, hacia la proveedora [redacted] S.A. de C.V., en fecha 28/01/2019 y venció el 12/06/2019.

En ese sentido, de conformidad al artículo 5 inciso 2° y 7 literal b) de las DTPA, se advierte que a la fecha de esta resolución se ha superado el plazo máximo para emitir la resolución final (90 días hábiles) contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución del auto de inicio del procedimiento administrativo a la proveedora, por tanto, corresponde a este Tribunal Sancionador ***declarar de oficio la caducidad del procedimiento sancionador.***

Es así que este Tribunal, respetuoso del Estado de Derecho y de los principios aplicables en materia sancionadora, se ve imposibilitado de continuar con el procedimiento sancionatorio, puesto que por el transcurso del tiempo sin que se haya pronunciado y notificado resolución expresa que pusiera fin al procedimiento administrativo sancionador, se procede a la caducidad al caso concreto. Por lo antes expuesto, se deberá declarar de oficio el acaecimiento de la caducidad y aplicar sus efectos legales que son: a) la finalización y extinción del presente proceso administrativo dejando abierto el derecho del denunciante para re-iniciar otro proceso sancionador, siempre y cuando no hayan concurrido los supuestos de la prescripción de la denuncia de la infracción, y b) ordenar el archivo de las actuaciones.

III. En virtud de lo anterior y con base a los artículos 5 inciso 2° y 7 literal b) de las DTPA, este Tribunal RESUELVE:

¹ Gonzáles Pérez, Jesús. Manual de Derecho Procesal Administrativo. Civitas Ediciones, 3° edición, Madrid, 2001.

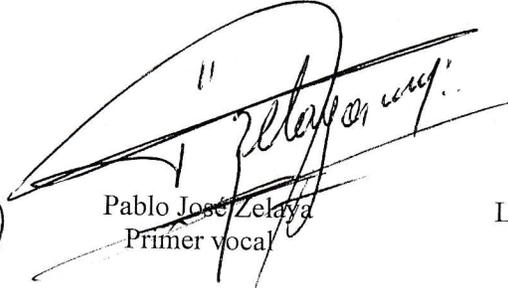
a) *Declárase la finalización y extinción* del presente procedimiento sancionador por haber acaecido la caducidad administrativa, el cual fue promovido por la Presidencia de la Defensoría del Consumidor en contra de la proveedora S.A. de C.V.; quedando abierta la posibilidad de que el denunciante pueda ejercer de nuevo su derecho de denuncia, si aún no han concurrido los efectos de prescripción aplicables.

b) *Archívese* las actuaciones del presente procedimiento sancionador.

c) *Notifíquese* a las partes.



José Leoisick Castro
Presidente



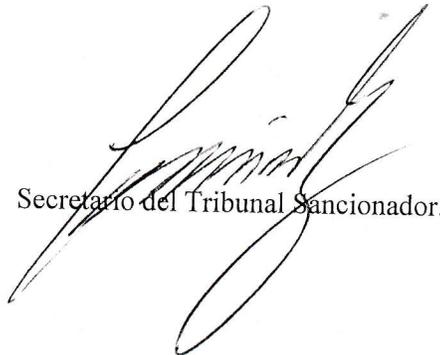
Pablo José Zelaya
Primer vocal



Lidia Patricia Castillo Amaya
Segunda vocal

PRONUNCIADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR QUE LO SUSCRIBEN.

AR



Secretario del Tribunal Sancionador.